



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto, tal y como indica su artículo 1 “establecer disposiciones específicas de aplicación en España del Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), y del Reglamento (UE) nº 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma”.

A tal efecto se regula el régimen de autorización de las distintas aplicaciones de los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (en adelante SANDACH), creando la Comisión Nacional de subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y delimitando las competencias de las distintas Administraciones Públicas implicadas en esta materia.

Desde el punto de vista de la aplicación de las normas de protección de datos resulta relevante la creación por el artículo 25 del Registro de Establecimientos, Plantas y Explotadores, en el que se incorporarán los datos referidos a los explotadores autorizados o registrados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, previéndose en el artículo 5 un régimen de comunicación de información por parte de las Administraciones competentes



de las Comunidades Autónomas a la Administración General del Estado, que comprenden las diversas autorizaciones establecidas por el Proyecto y por la normativa de la Unión Europea que resulta de aplicación.

Según indica el artículo 25.2, el registro será una base de datos informatizada y tendrá carácter público e informativo, si bien se especifica que ello será “sin perjuicio de los límites que legalmente corresponden para la protección de los datos carácter personal”. El registros contendrá los datos obrantes en los que hubieran sido creados por las autoridades competentes, incorporando la información incluida en Anexo I del Proyecto sometido a informe, que respecto de los datos del titular de la explotación señala que “se protegerán conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, siendo los únicos datos incluidos en el Registro los de apellidos y nombre o razón social y NIF.

La inclusión de los datos en el registro constituye un tratamiento de datos de carácter personal que deberá respetar lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

En este sentido, el artículo 6.4 del reglamento 1774/2002 ya disponía que “cada Estado miembro elaborará una lista de las plantas autorizadas dentro de su propio territorio conforme al presente Reglamento. Cada una de ellas recibirá un número oficial que servirá para identificar a la planta en relación con la naturaleza de sus actividades. Los Estados miembros remitirán copias de sus listas y de las correspondientes versiones actualizadas a los demás Estados miembros y a la Comisión”.

A tal efecto, el Reglamento 1192/2006, de 4 de agosto, establecía las normas de aplicación por lo que se refiere a las listas de plantas autorizadas, disponiendo el apartado 2 e) de su Anexo que “cada Estado miembro proporcionará a la Comisión una dirección de enlace a un único sitio web nacional que contendrá la lista de referencia de las listas de todas las plantas autorizadas en su territorio («la lista de referencia»”.

En el régimen actualmente en vigor, el artículo 47.1 del Reglamento (CE) 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y deroga Reglamento (CE) núm. 1774/2002, de 3-10-2002 (Reglamento sobre subproductos animales), indica lo siguiente:

*“Cada Estado miembro establecerá una lista de establecimientos, plantas y explotadores que han sido autorizados o registrados de acuerdo con el presente Reglamento y se encuentren en su territorio.*



*Asignará un número oficial a cada establecimiento, planta o explotador autorizado o registrado que identificará el establecimiento, la planta o el explotador en relación con la naturaleza de sus actividades.*

*Los Estados miembros indicarán, en su caso, un número oficial que se haya asignado al establecimiento, a la planta o al explotador con arreglo a otra legislación comunitaria.*

*Pondrán a disposición de la Comisión y de los demás Estados miembros las listas de establecimientos, plantas y explotadores autorizados o registrados.*

*Los Estados miembros mantendrán actualizadas las listas de establecimientos, plantas y explotadores autorizados o registrados y las pondrán a disposición de los demás Estados miembros y del público.*

Si bien no se establece ninguna previsión específica al respecto, de las normas citadas se deriva que la publicidad que habrá de darse podrá ir referida exclusivamente a los propios establecimientos, sin incluir datos de carácter personal de los titulares de los mismos, de forma que en lo que se refiere a esa publicidad no serían aplicables las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999.

Ello se ratificaría por el hecho de que la propia norma sometida a informe se remite a la Ley Orgánica 15/1999 en lo referido a “los límites” aplicables a la publicidad de la información.

Por este motivo, la recogida de los datos aparecería fundada en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con las normas comunitarias que se han reproducido con anterioridad, si bien la publicidad del registro no se referirá a datos de carácter personal, al no ser precisa en el marco contenido en las mencionadas normas.

Por este motivo, sería conveniente indicar en el Proyecto que el registro “tendrá carácter público e informativo, **si bien no se harán públicos los datos de carácter personal de las personas físicas titulares de los establecimientos**”.

En cuanto al intercambio de información entre el Estado y la Comunidades Autónomas, que por una parte nutrirán el Registro y por otra incorporarán los datos resultantes de su actuación conforme al artículo 5 del Proyecto, la misma aparecería amparada por el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el



tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”.

En este sentido, señala el artículo 10.4 c) del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que será posible la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin contar con el consentimiento del interesado cuando “La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen sobre las mismas materias”.

En consecuencia, se emite informe favorable al Proyecto sometido al parecer de esta Agencia.